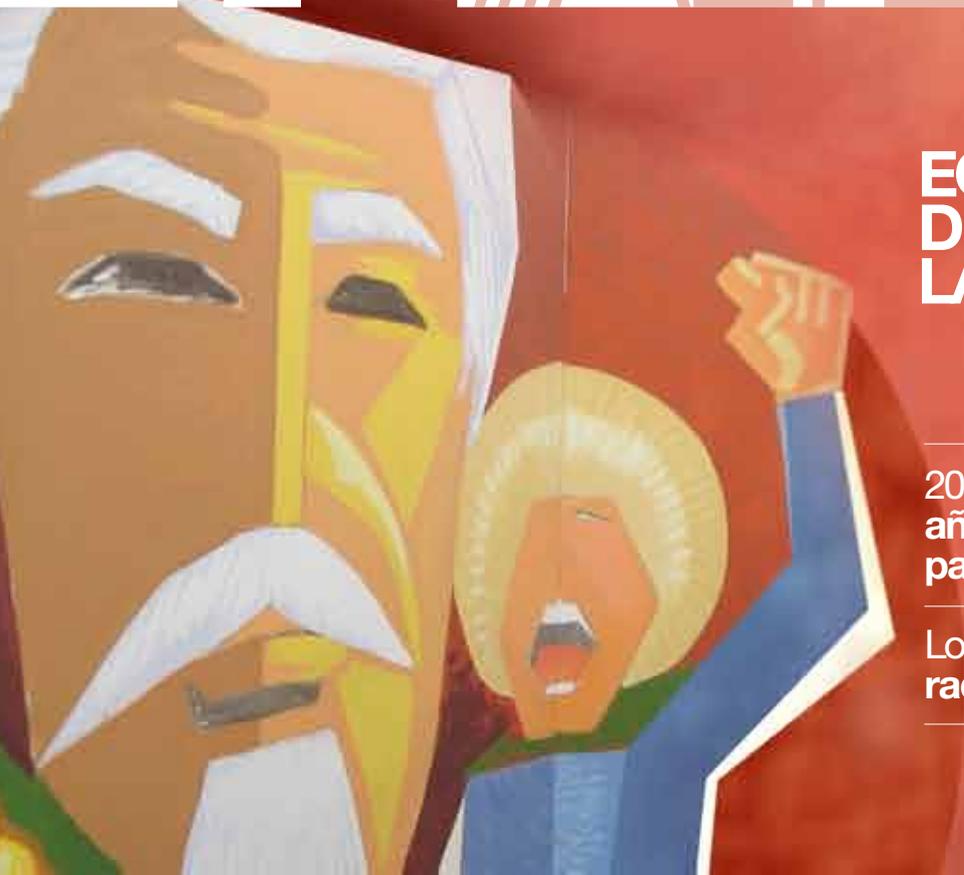


Febrero 2012

# CO RRIEN TE // ALTERNNA



## ECUADOR: DILEMAS EN LAS IZQUIERDAS

---

2012:  
año decisivo  
para el proceso de cambio

---

Los desafíos del poder:  
radicalidad y pragmatismo

---

# ÍNDICE

4-6

Coyuntura//

Imperativo ético frente al 2013:  
**más poder político para profundizar  
el cambio democrático**

Hernán Reyes Aguinaga

7

Ecuador: **Dilemas en las izquierdas**

8-10

Tema Central//

**Radicalidad o pragmatismo:**  
¿dilema de los gobiernos de izquierda?

Juan Pablo Muñoz

11-12

Tema Central//

**Las izquierdas bajo la lupa**

Juan J. Paz y Miño Cepeda

13-18

Tema Central//

**Neoliberalismo, estado y cambio político**

Franklin Ramírez Gallegos

19-25

Tema Central//

**¿Cómo caminamos al Socialismo del Buen Vivir?**

Cinco años de Revolución Ciudadana  
desde el Plan Nacional del Buen Vivir

Pabel Muñoz

26-27

Tema Central//

Organizaciones Sociales:  
**Actores del cambio más allá del gobierno**

Vanessa Bolaños

28-30

Local//

Descentralización:  
**la Revolución también se sostiene en lo local**

Fernanda Maldonado

31-32

Local//

Desde los barrios de Quito:  
**Construyendo actores sociales  
para el cambio en la ciudad y el país**

Luis Esparza

33-34

Internacional//

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños  
**¿Eclipse en el atardecer neoliberal  
o nuevo amanecer para la integración regional?**

Manuel Cereza

CO  
RRIEN  
TE//ALterna

## Créditos

Consejo Editorial:

Hernán Reyes

Juan Pablo Muñoz

María Fernanda Maldonado

Pabel Muñoz

Susanna Segovia

Vanessa Bolaños

Editora:

Susanna Segovia

Diseño e Impresión:

Kreathink/ Comunicación Visual

MA. Dle. Dg. Jorge Valverde

Fotografía:

Archivo Terranueva

Susanna Segovia

Stock.XCHNG Vi

# Neoliberalismo, estado y cambio político

**I.** La vigente crisis del capitalismo neoliberal ancla hoy en día sus más complejos efectos en los dominios de las que, hasta hace poco, se consideraban los estables centros de la economía mundo. El imperativo de tranquilizar a los mercados financieros ha empujado a la recesión en la zona euro y a una sostenida desaceleración del crecimiento en EEUU.

Aunque desde un inicio la gestión de la crisis ha sido asumida desde la perspectiva de la ortodoxia fiscalista, las calificadoras de riesgos –voceras de las finanzas transnacionales y comisarios de la política económica global- no dejan de demandar cada vez más austeridad y mayor control de la deuda pública a los estados. A los ojos de los mercados financieros, ni las políticas de represión presupuestaria ni las drásticas medidas para el control de la deuda parecen ser suficiente garantía para enfrentar la crisis. En este escenario, todo apunta a que en el futuro inmediato se refuerce el poder de clase del bloque neoliberal: la alianza de los jefes del mundo financiero, los gerentes y profesionales de la banca y, más atrás, partidos alineados con el credo de la disciplina presupuestaria. Bajo dicha hegemonía, el imperativo del control del déficit público continuará sofocando cualquier política activa de los estados europeos y trasladando los costos de la crisis a las grandes mayorías.



Éstas últimas ya han dejado evidencia de su frustración. Animadas por la primavera árabe contra gobiernos despóticos, en el corazón de otra gran parte de las protestas sociales que tuvieron lugar en diversos puntos del planeta –desde los “indignados” españoles, las movilizaciones en Tel Aviv, los estudiantes chilenos, el Occupy Wall Street (OWS) del bajo Manhattan, a las movilizaciones en 951 ciudades el 15 de octubre pasado- se observa no solamente la mundialización del malestar popular con los efectos sociales acelerados por la gestión de la crisis, sino la abierta contestación al bloque de poder que ha impuesto el vigente régimen capitalista neoliberal de acumulación flexible que domina el globo desde hace más de 30 años. Los ocupantes de Liberty Street, a una cuadra del Banco de la Reserva Federal de New York, lo han expresado con nitidez: “somos el 99%”. El uno por ciento restante condensa al poder corporativo de la banca, de las finanzas y, simplemente, de los más ricos entre los ricos.

Dicha ola de contestación social entraña una doble impugación: los intereses del mercado financiero juegan en contra de las necesidades “de los más”, mientras el poder político se enajena de la defensa del bien común para acercarse a la representación de banqueros, acreedores y especuladores globales. No obstante, el hecho de que tal impugación contenga una comprensión cabal de la correlación de fuerzas a nivel global no debe hacernos confundir sobre el carácter real de dichas movilizaciones: se trata de un conjunto de luchas que, en términos generales, contienen demandas parciales y defensivas –buscan menos promover un avance de la sociedad que evitar la profundización de los retrocesos y la pérdida de conquistas sociales en medio del ataque sistemático al estado social<sup>1</sup>- y que se desarrollan en el terreno fijado por el aún férreo dominio del poder transnacional del capital financiero.



Justamente ésta es la cuestión que suele perderse de vista en el análisis que realiza un amplio espectro del pensamiento crítico con relación a la orientación y al desempeño de los diferentes proyectos gubernativos de las izquierdas sudamericanas. Más allá

de sus retóricas altisonantes –y del hecho de que algunas de sus expresiones hayan traído de vuelta la idea del socialismo a sus programas-, el escenario político en que tales gobiernos se desenvuelven no deja de estar configurado por las líneas de poder de las finanzas globales en que se sostiene el neoliberalismo. Reconocer ésto no supone, como cierta vulgata insinúa, dimitir política e intelectualmente de la búsqueda de alternativas anti-capitalistas concretas, pero sí busca enfocar, sin veleidades ideológicas, el específico terreno de la lucha política como condición necesaria para una ponderación adecuada de los avances, tensiones y contradicciones de los gobiernos progresistas de la región.

II. En su globalidad, tales gobiernos procuran reconstruir y re-direccionar las mediaciones socio-políticas que han contribuido a la *integración subordinada* de los territorios nacionales en la dinámica de acumulación especulativa del capital financiero. La recomposición de tales mediaciones se catapulta en el nivel nacional a través de la acción política de los Estados. Precisamente, quebrar la iniciativa política de dichos Estados, acabar con su deber de regular los mercados y con su capacidad de dirección del conjunto social, ha sido la obstinación neoliberal. Contra ella se dirige el vigente relanzamiento –más o menos voluntarista y/o institucionalizado según los casos- del Estado al primer plano de la coordinación social. La noción de integración implica, no obstante, que un Estado no puede escoger no estar integrado –¿es concebible una estrategia de aislamiento?- y que actúa en un específico contexto internacional, signado por el neoliberalismo. Ello no significa que las políticas nacionales sean irrelevantes, sino que están limitadas por las pautas de la acumulación financiera global. Desde esta perspectiva, la acción estatal engrana estrategias que pueden apuntalar mayor o menor grado de autonomía y soberanía en relación a la determinación global<sup>2</sup>.

1.- Ver B. De Sousa Santos, 2011, “La huelga general”, en <http://firgoa.usc.es/drupal/node/50539>.

2.- Ver M. Twaites Ray, 2008, “¿Qué estado tras el experimento neoliberal?”, Revista del CLAD No. 41.

En tal escenario diversos sectores, incluso progresistas, consideran que el espacio de lo local -“ciudades-estado”, “regiones autonómicas”- brinda las mejores condiciones para la recomposición democrática de las mediaciones políticas y sociales con los mercados globales. Ésa no ha sido la orientación estratégica de los gobiernos transformacionales de la región. Aquellos han optado más bien por la reconfiguración de la dimensión estatal-nacional de la política y por la configuración de un espacio político regional (UNASUR, CELAC) como dinámicas fundamentales en la tensión con la estructura global de poder. Se perfila así una estrategia “neo-soberanista” que, reivindicando la auto-determinación de los intereses nacionales, realiza una apuesta geo-política por la integración (sub)regional<sup>3</sup> mientras toma distancia de un nacionalismo refractario a reconocer la dinámica de los intercambios globales.

Así, aún si han incorporado demandas localistas y autonomistas en sus plataformas de reconstrucción del poder estatal, tales gobiernos no parecen receptivos a la idea de propulsar regímenes territoriales de autonomía plena, fácilmente digeribles por la globalización neoliberal. Más bien, la centralidad política del Estado enfrenta tendencias previas de atomización (Ecuador, Bolivia) -propulsadas por proyectos autonomistas de base regional dispuestos a forjar “republiquetas” hostiles a toda idea de una comunidad política nacional-, y recupera la iniciativa de los aparatos centrales de cara a gobernar y a mantener presencia activa en el conjunto del espacio nacional. De hecho, los gobiernos de cambio anclan parte de su legitimidad en haber logrado que sus plataformas programáticas inter-pelen a la sociedad como “proyectos nacionales”. Luego del prolongado ciclo de des-estatización de la economía y des-nacionalización de la política que acompañó al neoliberalismo, las arenas estatales reemergen entonces como el terreno en que se afirma la idea del bien común y se ponderan los intereses nacionales, sin cuya definición no es posible trazar vías alternas de inserción externa.

Es este retorno del Estado el que ha provocado las más virulentas reacciones de las elites bancarias, empresariales y financieras nacionales que, en su momento, impulsaron las políticas de desregulación, liberalización y privatización que pulverizaron las capacidades estatales de promoción del desarrollo nacional, control del mercado y redistribución de la riqueza social. También vertientes de izquierdas y sectores con sensibilidades autonomistas se oponen a la centralidad que los gobiernos sudamericanos asignan a la reestructuración estatal. Por un lado argumentan, en tono funcionalista, que todo lo que consolida el Estado contribuye a la reproducción del capital; por otro, y en una mirada anti-institucionalista que bordea un anti-política conservadora, se defiende que sólo en la acción colectiva autónoma reside el potencial para construir opciones alternativas verdaderas.

*“el escenario político  
en que los gobiernos de  
izquierda sudamericanos  
se desenvuelven  
no deja de estar configurado por las  
líneas de poder  
de las finanzas globales  
del neoliberalismo”*

La crítica conservadora combina elementos de la doctrina liberal -el imperativo del Estado mínimo como garantía de la no intromisión de la política en las iniciativas individuales (la libertad negativa) y en la fluidez del mercado- con la más llana defensa de un puñado de intereses particulares que florecieron en los tiempos de la des-regulación. La crítica autonomista presupone, por su parte, un corte tajante entre auto-organización social e institucionalidad política bajo la mirada moralizante de las virtudes emancipatorias de movimientos sociales virginales.

3.- La integración geo-política de la región rompe con la tradición liberal de la integración regida por los (puros) intereses comerciales.

En tal lectura, la política estatal solo puede contaminarlos y derruir su capacidad de movilización utópica. La distancia del movimiento social con respecto a la política instrumental es imprescindible para preservar su potencial de imaginación crítica<sup>4</sup>. Pero creer que la sola reivindicación de la autonomía de los colectivos resuelve el dilema de la lucha por el poder estatal es una ilusión que puede conducir al aislamiento del movimiento social de la disputa por el cambio y, más aún, a una suerte de parroquialización de sus luchas en micro-arenas de actividad pública (“hegemonía de garaje”).

Por su parte, la crítica del Estado como una pieza más de la reproducción del capitalismo pierde de vista que el Estado es una forma de relación social contradictoria, y que sus acciones, su andamiaje organizativo y su misma orientación están atravesados por dicha contradicción. De ahí que las políticas y las instituciones estatales que pueden aparecer como conquistas de los sectores populares y de las clases subalternas contribuyan también a la legitimación de un sistema que tiende a perennizar su condición. La historia de los derechos sociales y las instituciones de bienestar, arrancadas al capital por “los de abajo”, refleja de modo nítido la complejidad de tal ambivalencia<sup>5</sup>. Decir, entonces, que el Estado constituye una pura continuidad del capital aparece como una abstracción incapaz de captar la contradictoria dinámica de los intereses que se materializan en su seno y, sobre todo, como una generalización que no da cuenta de los conflictos que pueden orientar la acción estatal hacia la defensa de los intereses mayoritarios, la producción de bienes colectivos y la confrontación de las lógicas excluyentes e inequitativas que sostienen al capitalismo.

Dicha orientación es siempre una posibilidad que, condicionada por la acumulación global, depende



de la capacidad de las fuerzas en disputa en cada territorio nacional para inscribir sus demandas en la materialidad del Estado e incluso para encaminarlo como uno de los principales recursos para la transformación social. Esto último abre el interrogante, de modo particular, sobre el sentido de las decisiones políticas de las instituciones y elites locales responsables de la conducción gubernativa en cada sociedad.

III. Decir que el retorno del Estado supone la quiebra política del poder de las finanzas globales y del consenso neoliberal puede resultar una generalización tan banal como aquella que sostiene que todo lo que se refiere al Estado alimenta al capital. Si de entender el cambio político se trata, cabría más bien indagar en qué medida el retorno estatal definido como prioridad estratégica por los distintos gobiernos progresistas de la región logra desmontar al núcleo duro de la agenda neoliberal establecida en cada país. Y revisar si las políticas que se han adoptado abren la vía para disputar, en el mediano plazo, la configuración de esquemas alternos de acumulación y distribución de la riqueza, así como de formas democráticas de coordinación social.

4.- Ver M. Saint-Upéry, 2004, “La mistificación de lo social”, en Revista Barataria No. 1, La Paz-Bolivia.

5.- De igual modo, las formas del Estado se caracterizan y están atravesadas por los contradictorios modos de existencia de la sociedad civil que las produce (patrimonialismo, familismo amoroso, etc).



La Revolución Ciudadana, por su parte, enfrentó de inmediato el dilema de resquebrajar la matriz de poder social que había condicionado la dinámica democrática del país desde inicios de los años 80. Convocó entonces a la Asamblea Constituyente (2007) y tomó una serie de medidas que el movimiento popular venía reivindicando una década antes: el fin del convenio de cooperación militar que permitía a EE.UU tener presencia en la Base de Manta; la ratificación de la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY; la suspensión de la negociación del Tratado de Libre Comercio con EEUU; la ilegalización de la terciarización laboral; la incautación de los bienes de la gran banca, entre otras. La orientación programática de tales decisiones expresaba el virtual desacoplamiento entre el poder democrático y las redes transnacionales y locales que sostuvieron el ciclo de debilitamiento y plena instrumentalización del Estado nacional. Más allá de la voluntad política del gobierno, su capacidad decisional se catapultó en la reconstrucción de *factores estructurales* de poder que habilitarían, en lo posterior, el sólido relanzamiento del estado al primer plano de la coordinación social. Tomadas en los primeros años de gobierno, las siguientes líneas de decisión tienen particular relevancia al respecto:

Ambas cuestiones dependen de la capacidad de las nuevas coaliciones de poder para conducir el andamiaje estatal con relativa autonomía con respecto a las constelaciones neoliberales y a los intereses de los más poderosos.

A este respecto, las cosas no son nada sencillas. En medio de los jaloneos entre Caracas y Brasilia se ha visto ya como el recién posesionado Presidente peruano, Ollanta Humala, presentado por los medios conservadores como otro exponente del radicalismo izquierdista del siglo XXI, ha cedido en seis meses gran parte de su agenda de cambio y hoy se muestra como un líder tibiamente reformista en plena reconquista de la confianza de los mercados. Algo similar ocurrió en el Ecuador con el acceso al poder (2003) de Lucio Gutiérrez en alianza con Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático. En seis meses, la agenda post-ajuste del Coronel fue enterrada, mientras se anunciaba el acercamiento del país al eje Washington-Bogotá y se designaba como Ministro de Finanzas a un economista liberal cercano a la gran banca. Como a lo largo del último período democrático, el poder político –aún bajo una configuración de proyección popular- no alcanzaba a actuar con mínima autonomía respecto a los grandes intereses.

- a) La gestión nacional –sin interferencia del capital global- de una *porción sustantiva del excedente local proveniente de rentas de recursos estratégicos*. La creación y/o fortalecimiento de empresas públicas en sectores claves de la economía y la renegociación de contratos con diversas transnacionales de cara a incrementar los márgenes de participación estatal en los ingresos y regalías que se producen en tales sectores (p.e, petróleo) aparecen como decisiones significativas de cara a la (re)apropiación de recursos con alta capacidad de generación de renta diferencial;
- b) Opciones políticas encaminadas hacia el *resquebrajamiento de las correas de transmisión decisional del capital financiero sobre la economía nacional*. La declaratoria de ilegitimidad de tramos de endeudamiento y la entrada en default de una parte significativa de la deuda externa, redujeron largamente su peso en el presupuesto

público y recortaron el poder político de la especulación financiera a nivel nacional. A la vez, se eliminó la autonomía del Banco Central cuya independencia del poder político se ha colocado, en el discurso ortodoxo, como un valor central para la seguridad de los mercados; y

- c) una serie de medidas orientadas a *reforzar la centralidad de la política tributaria y la capacidad recaudatoria* del estado -aumento de la presión fiscal y mayor progresividad en los impuestos- en un marco de mayores controles a la salida de capitales (incremento del impuesto de salida de divisas del 1 al 5%).

Así, a contramano del sentido común neoliberal – capturar porciones del capital global a través de la apertura a la inversión extranjera, las zonas de libre comercio y la movilidad infinita del capital-, entre 2007-2011 la estrategia ecuatoriana apunta a la generación endógena y a la apropiación creciente de porciones sustantivas del excedente local. Para un estado periférico, esto resulta de capital importancia de cara a elevar los grados de libertad (soberanía) respecto a la estructura del poder global. Aunque el alcance de este conjunto de decisiones ha sido desigual, lo cierto es que también ha permitido al gobierno nacional colocarse en mejores condiciones de poder para disputar la centralidad del Estado en la determinación de la agenda pública. En tales condiciones de poder, dicha agenda supuso la recomposición de las capacidades estatales de planificación del desarrollo, regulación de las finanzas, control del mercado y redistribución de la riqueza. La distancia política e intelectual con el neoliberalismo es grande.

La sociedad y la nación hacen uso del Estado como agente fundamental para encaminar una estrategia heterodoxa de desarrollo. Los capitales nacionales y el ahorro interno financian la inversión pública, dinamizan la producción y apuntalan el gasto social. La agenda redistributiva reconstruye, a su vez, una matriz de inclusión social –protección del poder adquisitivo, continuidad de los subsidios, combinación de políticas universalistas y focalizadas de bienestar y protección social-, que se basa en

el doble imperativo de combatir la pobreza y lograr mayores niveles de igualdad. En medio de intensas presiones por prudencia fiscal, un cúmulo de demandas populares largamente represadas obtienen así respuesta institucional y amplían el margen de confianza social en la acción pública<sup>6</sup> mientras consolidan el campo de articulación hegemónica de la agenda del cambio. Ésta última toma forma institucional en el Estado y no se limita al voluntarismo de la conducción política como repite el pensamiento conservador en su evocación al fantasmagórico “carisma populista” o como machaca el pretencioso despliegue del marketing político oficialista.

La posibilidad de que dicho conjunto de políticas de transición propicie una efectiva diversificación y expansión de las fuerzas productivas nacionales en armonía con la naturaleza pasa, sin embargo, por revertir la centralidad del sector agro-exportador y extractivo en el patrón de acumulación; por colocar los adecuados incentivos para la innovación científica y tecnológica; y por encaminar una real distribución de los factores productivos. Todas estas cuestiones requieren de la preservación de los márgenes de autonomía relativa del Estado, en articulación con la movilización autónoma de los actores sociales que han soportado las dinámicas concentradoras y excluyentes de la economía centrada en el mercado. La debilidad de tales fuerzas, la fragilidad de dicha articulación y la escasa voluntad gubernamental por dar mayor cabida a la participación social alertan sobre la continuidad de la ruta post-neoliberal. ///

*“se requiere de la preservación de los márgenes de autonomía relativa del Estado, en articulación con la movilización autónoma de los actores sociales que han soportado las dinámicas concentradoras y excluyentes de la economía de mercado”*

6.- Según el reporte del Latinobarómetro 2011, el estado ecuatoriano se sitúa entre los dos estados valorados como más justos y eficaces en toda la región (Ver, [www.latinobarometro.org](http://www.latinobarometro.org)).